



**SALA TERCERA DE DECISION LABORAL**

<b>PROCESO</b>	ORDINARIO
<b>DEMANDANTE</b>	Juan Diego Uribe Loaiza
<b>DEMANDADOS</b>	AFPs Porvenir S.A., Colfondos S.A. y COLPENSIONES
<b>PROCEDENCIA</b>	Juzgado 7º Laboral del Circuito de Medellín
<b>RADICADO</b>	05001 3105 <b>007 2021 00234</b> 01
<b>INSTANCIA</b>	SEGUNDA
<b>PROVIDENCIA</b>	SENTENCIA Nro. 293 de 2022
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	Ineficacia de traslado
<b>DECISIÓN</b>	Revoca, adiciona y confirma

En la fecha, **dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación formulado por **el apoderado judicial de Colpensiones**, al igual que grado jurisdiccional de consulta para esta entidad ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Juan Diego Uribe Loaiza**, al que también fueron vinculadas por pasiva las **AFPs Porvenir S.A. y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías**. Radicado único nacional 05001 3105 **007 2021 00234** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13, de la Ley 2213 del año en curso, procede a emitir sentencia, según proyecto

estudiado, discutido y aprobado mediante acta Nro. **038**, que se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Pretende el demandante se declare la ineficacia del traslado que realizó del RPM al RAIS y en consecuencia, se condene a la AFP Porvenir a devolver a Colpensiones sus cotizaciones con sus correspondientes rendimientos, debiendo esta última entidad recibir tales recursos y reactivar la vinculación al RPM. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, **nació el 02 de junio de 1963**, al iniciar su vida laboral se afilió en pensiones al ISS. El 1º de agosto de 1995 se trasladó al RAIS a través de Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A., el 25 de junio de 2003 tuvo movilidad a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías S.A., y el 21 de mayo de 2008 retornó a Porvenir S.A.. Que para el traslado de régimen no se le dio por el asesor de Horizonte *toda la información necesaria, se limitó a decir que el traslado era necesario porque el ISS se iba a acabar y él se quedaría sin pensión. Además le informó que a través del fondo privado se podría pensionar a cualquier edad y con una pensión mejor. El funcionario no le explicó... que la pensión anticipada es casi imposible y que para ello son necesarios algunos requisitos difíciles de cumplir. ... nunca se le puso en conocimiento la diferencia en el valor de la mesada pensional entre el régimen de ahorro individual y Colpensiones. El 27 de abril de 2021 solicitó a Colpensiones le aceptara el traslado de régimen, lo que le fue negado por encontrarse a menos de 10 años de la edad para pensión, quedando así agotada la reclamación administrativa.*

Verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, en auto del **01 de junio de 2021 se admitió y ordenó dar trámite a la acción.** Debidamente enteradas de tal actuación, dentro de la oportunidad para ello, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

**Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías**, admite la fecha de nacimiento del demandante, la movilidad dentro del RAIS a esa AFP y luego a Porvenir S.A., porque así se desprende de los documentos aportados. Los demás supuestos no le constan por ser circunstancias ajenas o totalmente desconocidas para esa sociedad. Se **opuso** a la prosperidad de las pretensiones. Relacionó los fundamentos de hecho y de derecho de su defensa y excepcionó inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, innominada o genérica, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por Colfondos S.A., prescripción compensación y pago.

**Porvenir S.A.** manifestó oposición a las pretensiones. Frente a los hechos no le constan o no son ciertos. La fecha de nacimiento debe probarse con documento idóneo. La afiliación al RPM por ser administrado por un tercero ajeno a esa sociedad. Sobre la vinculación a esa AFP, explica que se dio en el año 1995 a través de Horizonte, de manera libre, espontanea, sin presiones o engaños, *después de haber sido amplia y oportunamente informada, sobre el funcionamiento del RAIS y de sus condiciones pensionales*, tal y como se aprecia en la solicitud de vinculación que contiene la declaración escrita a que se refiere el artículo 114 de la Ley 100 de 1993, documento que se presume auténtico en los términos de los artículos 243 y 244 del CGP y el parágrafo del artículo 54 A del CPT, con leyenda preimpresa de libertad y voluntariedad. Expuso los hechos, fundamentos y razones de su defensa, explicando que en el año 2003 el actor se trasladó a Colfondos S.A. y luego retornó a Porvenir S.A. en el 2009. Formuló **las excepciones** de: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la genérica.

**Colpensiones.** De los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento del demandante y el tiempo de afiliación al RPM porque así aparece

documentalmente acreditado. También tiene como ciertos el traslado al RAIS a través de Horizonte, el 1º de agosto de 1995, la movilidad a Colfondos S.A. el 25 de julio de 2003, y luego a Porvenir S.A. el 11 de agosto de 2009, al igual que la solicitud de retorno al régimen público, la respuesta negativa y con ello el agotamiento de la reclamación administrativa. Los demás supuestos no le constan. **Resistió** las pretensiones y formuló las **excepciones** de inexistencia de la ineficacia en el traslado de régimen, indebida aplicación de las normas en materia de asesoría de traslado pensional, inversión de la carga dinámica de la prueba, errónea interpretación e indebida aplicación del artículo 1604 del Código Civil, ausencia de cumplimiento de las obligaciones legales del demandante según el Decreto 2241 de 2010, y de las obligaciones recíprocas del contrato de afiliación, desconocimiento del precedente judicial en los fallos de ineficacias de traslado de régimen pensional, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, devolución de la totalidad de aportes debidamente indexados, buena fe, prescripción, innominada, compensación e imposibilidad de condena en costas.

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito el 03 de octubre del año en curso, declarando la ineficacia del traslado efectuado por el demandante del RPM al RAIS administrado por la AFP Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A., y los posteriores a las AFP Colfondos S.A. y Porvenir S.A. en los años 2003 y 2009, y que se encuentra válidamente afiliado al RPMPD administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad y, en consecuencia, condenó a la AFP Porvenir S.A. *a trasladar los dineros con destino a **Colpensiones**, de los montos existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante y los aportes al FGPM con sus respectivos rendimientos financieros, **se exceptúan de dicha devolución los dineros destinados a pago de cuotas de administración y prima de seguros previsionales para los riesgos de invalidez y muerte.*** Ello dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia; la AFP Colfondos S.A., dentro del mismo término debe devolver los dineros destinados a cuotas

de administración durante el tiempo de afiliación del demandante a esa sociedad, **exceptuando el porcentaje aplicado a los seguros previsionales para los riesgos de invalidez y sobrevivencia.** Condenó a Colpensiones a validar la afiliación del demandante y a recibir los rubros devueltos y además tenerlos en cuenta como semanas que deberán reflejarse en su historia laboral. Declaró no probadas las excepciones propuestas, salvo las de buena fe e imposibilidad de condena en costas para Colpensiones; y en forma oficiosa, la de inexistencia de la obligación de devolver las cuotas de administración y seguro previsional en favor de Porvenir S.A., y el seguro previsional para Colfondos S.A.; impuso condena en costas a las AFP Porvenir y Colfondos S.A., fijando el monto de las agencias en derecho, y dispuso el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones.

Argumentó la falladora que el traslado de régimen se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, partiendo el mismo de la cabal y correcta asesoría que lleve al asegurado a tomar una decisión responsable e informada sobre dicho acto, indicando la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, que la omisión de las administradoras de pensiones en brindar una debida asesoría al momento de la movilidad entre regímenes o entre administradoras del RAIS convierte en ineficaz el acto de vinculación, posición que ha constituido una línea jurisprudencial pacífica y reiterada desde el 2008, estableciéndose en dichas sentencias que las administradoras desde su creación, es decir, desde 1994 que empezó a regir el sistema pensional de la Ley 100, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudieran adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional, existiendo hasta el 2009 un deber de información, con posterioridad y hasta el 2015 el deber de asesoría y buen consejo, y en la actualidad la doble asesoría; que la simple constancia del consentimiento vertido en el formulario de

afiliación es insuficiente para dar por demostrado el deber de información, pues, ello a lo sumo acredita un consentimiento, pero no informado, y que la carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió una ilustración debida, veraz y suficiente cuando se vinculó le corresponde a la administradora de fondos de pensiones, estableciendo que para el caso, se presentó un incumplimiento al deber de información, pues, no se advierte que se le hubiese suministrado la necesaria, completa y veraz al suscribir el acto inicial, ni cuando se dieron los traslados de administradoras intrarégimen, razón por la cual procedente resultaba la declaratoria de ineficacia de la afiliación, con las consecuentes restituciones económicas, y al haber demostrado Porvenir el debido cumplimiento de la gestión fiduciaria y generación de rendimientos abonados a la cuenta de ahorro individual, no hay lugar a incluir dentro de las sumas a devolver, el porcentaje aplicado a gastos de administración, no ocurriendo lo mismo con Colfondos que ninguna prueba frente al particular arrimó. Y en cuanto a los rubros aplicados a seguros previsionales, estos, en ambas AFP cubrieron, durante la vigencia de la vinculación del demandante, los riesgos de invalidez y sobrevivencia, razón por la que no hay lugar a su retorno, máxime cuando fueron pagados a una aseguradora que se constituye en un tercero de buena fe no vinculado a este trámite.

Inconforme con la decisión se interpuso recurso **de apelación** por el apoderado de **Colpensiones**, argumentando que con la misma se concurre a menoscabar el patrimonio del RPM, pues de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, que introdujo el principio de estabilidad financiera en el sistema pensional, se deben considerar dos dimensiones del sistema, esto es, un derecho constitucional fundamental y un servicio público de carácter obligatorio, el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras de la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; y entre otras consecuencias, la declaración

injustificada del traslado de un afiliado del RPM al RAIS, y la reactivación de su afiliación a Colpensiones, afecta la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados, pues en principio representa la garantía fundamental a la atención de los Colombianos de manera sostenida e indefinida, sostenibilidad que se encuentra afectada dada la inexistencia de equivalencia entre los valores recibidos y los requeridos para el posterior reconocimiento de la pensión del demandante, por lo que solicita revocar la sentencia.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **el apoderado judicial de Colpensiones**, quien luego de aludir a la figura de la carga dinámica de la prueba, precisa que en estos asuntos a los demandantes les basta afirmar que no se les brindó información precisa, clara y exacta, asumiendo luego una actitud pasiva, lo que altera la lógica probatoria, llamando la atención a la sala sobre la importancia de la protección del RPMPD, *pues es sabido que estos casos de nulidades están teniendo un impacto fiscal considerable para la entidad administradora de dicho régimen, pues cuando se efectúa el traslado de régimen de estos afiliados, cuando están próximos a cumplir la edad para acceder a la pensión de vejez, se contribuye a desfinanciar el sistema de prima media, y por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes.* Cita luego las etapas del deber de información y normas que aplican a cada una, sin que sea *razonable imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen*, por lo que solicita denegar las pretensiones.

Por último, hace referencia a la sentencia SL373-2021, de la Sala de Casación laboral, la cual moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, *esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual*, por lo que

en el evento de estar el demandante en tal situación, pide no acoger las pretensiones y en caso de prosperar las mismas, pide *se devuelvan todos los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, tales como cuotas de administración, primas provisionales, porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, rendimientos y utilidades y que los mismos sean devueltos indexados.*

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen: la fecha de **nacimiento del demandante 02 de junio de 1963**, con afiliación al sistema pensional, régimen de prima media con prestación definida, el **10 de abril de 1985**, mediante formulario suscrito el **07 de julio de 1995** se trasladó al RAIS AFP Horizonte S.A., con movilidad dentro de este régimen **el 25 de julio de 2003** a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y **el 11 de agosto de 2009** a Porvenir S.A.. Según historia laboral allegada con el escrito de contestación, al mes de febrero de 2021, contaba con un total de **1.835 semanas**.

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos del apelante y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS a través de la AFP Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A. y su posterior movilidad a Colfondos S.A. y Porvenir S.A., y como consecuencia de ello, a la activación de la vinculación en el RPMPD administrado por COLPENSIONES, con las correspondientes restituciones económicas y los conceptos que estas comprenden.



Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas que la movilidad entre regímenes debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, dado que el formulario con Horizonte se firmó el 07 de julio de 1995**, y la primera movilidad entre administradoras en **julio de 2003**, se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal y, por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye dar a conocer la eventual pérdida de beneficios pensionales; y para el mes de agosto de 2009**, ya regía la Ley 1328 del 15 de julio de esa anualidad, que imponía el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pudiera emitir un consejo, sugerencia o recomendación acerca de lo que más le convenía y, por tanto, lo que podría perjudicarle, resultando extraño **que en el escrito de contestación, Porvenir S.A., siendo la actual administradora pensiones del actor, diga que no le consta la fecha de nacimiento y tampoco le consta la vinculación al régimen de prima media, y sin embargo en la historia laboral aportada con tal acto procesal y la traída con la demanda, no desconocida ni tachada, se computen 506 semanas con entidades públicas para bono pensional, 311,8 cotizadas a otras administradoras, y 1.017,4 directamente aportadas al RAIS, para un total de 1.835**, resultando tales datos indispensables no solo para la afiliación, sino para determinar qué

implicaciones tenía el tránsito entre regímenes y luego, la permanencia en el RAIS, **conducta que denota el desinterés y desdén total de la AFP por la suerte del derecho pensional del aquí demandante**, sin que se haya aportado ni por Porvenir S.A. ni por Colfondos S.A., medio de convicción sobre la **información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz acorde a los datos suministrados por el afiliado y en cumplimiento de las obligaciones vigentes para cada ciclo de la regulación**, obligación de ilustración que deben cumplir las AFP al momento del acto de traslado de régimen y no en forma posterior, sin que haya lugar a saneamiento por reasesoría, la que dicho sea de paso, ni siquiera se dio.

Estando la carga de la prueba en cabeza de las administradoras, sin que sea requisito para su cumplimiento que el afiliado goce del beneficio de la transición o tenga un derecho pensional consolidado, ni sea el ciudadano quien deba efectuar el estudio del tema, así se explica en sentencia SL2484-2022, con fecha 24 de mayo de 2022:

*Sobre el particular, la Sala reitera que le corresponde a la administradora de pensiones acreditar el cumplimiento del deber de información, pues exigir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que no haber recibido información suficiente corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación<sup>1</sup> (CSJ SL1452-2019, reiterada en CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019 y CSJ SL4806-2020).*

*Asimismo, porque la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad quien debe observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.*

*Y es que no es razonable invertir la carga de la prueba contra la otra parte de la relación contractual, toda vez que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto del afiliado lego, a tal punto que la legislación considera*

---

<sup>1</sup> En tal sentido, el artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional.

*una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros.*

*En esa perspectiva, se advierte que le asiste razón al recurrente cuando afirma que el Tribunal se equivocó al asignarle la carga probatoria, pues la misma compete a la AFP convocada. Negrillas fuera del texto original.*

Y tampoco se puede afirmar que la ignorancia de la Ley no sirve de excusa y una vez promulgada debe ser conocida, pues se está ante un tema de carácter técnico, en que cada precepto normativo tiene reglamentación y desarrollo jurisprudencial concreto, debiendo analizarse la **situación particular y específica de cada afiliado**, explicándose por la jurisprudencia especializada que los servicios a cargo de las AFP:

- *i) están íntimamente ligados con derechos de raigambre constitucional;*
- *ii) dicha entidad es profesional y/o experta, en una materia que esta «respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios»;*
- *iii) la reglamentación del sistema de seguridad social es compleja y en el caso del RAIS, no solo está integrada por un asunto «hiperregulado, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y macroeconómicas»;*
- *iv) existen limitaciones de los usuarios relacionadas con sus «condiciones económicas, sociales, educativas y culturales, que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones»,*

Sin que del formulario de afiliación se infiera la debida información, porque:

*..., la simple firma, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, CSJ SL4964-2018, CSJ SL12136-2014, reiterada en CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4062-2021 y SL2484-2022).*

Siendo la consecuencia de la inobservancia de tal deber, **la ineficacia del acto de traslado, y posterior movilidad entre administradoras, en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993**, sin que la acción tendiente a su declaratoria se vea afectada por el

fenómeno extintivo de la prescripción, retrotrayéndose las cosas al estado anterior, con las correspondientes restituciones económicas.

De acuerdo con ello y por ser el precedente vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, es el acogido por esta Sala de Decisión, advirtiéndose que en lo atinente a los rubros a devolver una vez declarada la ineficacia del acto de traslado, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y **la obligación de las AFP de asumir lo descontados por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio**, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022**, sin que sea una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable**, explicándose en la última referenciada:

*Por tal motivo, ante esta declaratoria, la AFP debe trasladar a Colpensiones la totalidad de los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual del accionante y bonos pensionales que recibió junto con sus rendimientos. Asimismo, la citada AFP deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL2877-2020 y CSJ SL4063-2021).*

Razón por la que se impone **revocar** los **numerales tercero**, de la parte resolutive de la sentencia para incluir dentro de los conceptos a restituir por la **AFP Porvenir S.A.**, el saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante, con los rendimientos, con los porcentajes aplicados a gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima, estos últimos tres debidamente indexados y con cargo a los recursos de la

AFP; el numeral **cuarto**, para ordenar a **Colfondos S.A**, la devolución de los porcentajes aplicados a gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima, debidamente indexados, correspondientes al tiempo en que el demandante estuvo vinculado a esa sociedad; y el numeral **sexto**, en para declarar improbadas las excepciones aplicadas oficiosamente por la juzgadora, de inexistencia de devolución de cuotas de administración y prima de seguro previsional.

Lo anterior, por cuanto al declararse la ineficacia del traslado, las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: *Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.*

*Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020 y SL843-2022).*

Sin que ello constituya enriquecimiento sin causa para el demandante o para Colpensiones.

**Se adicionan los numerales tercero y cuarto para indicar** que al momento de cumplirse la orden en relación con las restituciones dispuestas, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Y si bien es cierto el demandante afirma que uno de los motivos para promover esta acción es obtener una mejor mesada, frente a ello resulta ilustrativo lo explicado por la jurisprudencia especializada en sentencia SL 1055-2022:

*Ahora, si bien en el presente asunto uno de los argumentos del accionante fue el relativo a demostrar que su pensión en prima media sería más favorable que en el RAIS, esto de ningún modo debe permitir desviar la atención a lo importante, esto es, verificar si al momento del traslado efectivo el afiliado accedió a una información clara y precisa sobre las ventajas, desventajas y riesgos de cada régimen en los términos explicados. Y tampoco difumina lo anterior el hecho de que la persona no haya retornado a prima media en los términos de ley, pues se reitera, lo que concierne a estos asuntos es constatar el obedecimiento de dicho deber legal de información, independientemente de que la persona tenga o no aquella posibilidad legal de retorno.*

*Precisamente en este punto la Corte advierte que la opositora Old Mutual S.A. sugiere que la afiliación entre regímenes privados es un acto de relacionamiento que implica su voluntad de permanecer al RAIS. Si bien el Tribunal no acudió expresamente a este argumento, lo cierto es que destacó que el afiliado tuvo la oportunidad de trasladarse en el periodo de gracia que estableció la Ley 797 de 2003 para retornar a Colpensiones y no lo hizo, lo que a su juicio ratificaba su voluntad de continuar en el RAIS.*

*Pues bien, como se explicó en las sentencias CSJ SL5686-2021 y SL5688-2021, los argumentos de esta índole son inadmisibles pues desatienden que el eje central de estas discusiones está en determinar si al momento del traslado de prima media al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión. En este sentido, los actos u omisiones posteriores del afiliado, bien sea porque se trasladó entre fondos privados o no retornó a prima media en las oportunidades legales previstas, no pueden validar el desacato legal que genera la ineficacia del acto jurídico del traslado de régimen, precisamente porque al ser posteriores dejan intactos los hechos u omisiones que anteceden al acto jurídico ineficaz, el cual no puede sanearse como la nulidad.*

*De modo que no es dable siquiera sugerir que los posteriores traslados entre administradoras pueden configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad de permanencia en ellas, como se infiere de las decisiones de la Sala de Descongestión de esta Corte CSJ SL249-2022 y SL259-2022. Nótese que, conforme la perspectiva explicada, esa voluntad de permanencia en el RAIS es inane dado que no desvirtúa el incumplimiento del deber de información y además ubica la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz, esto es, el del traslado inicial.*

*Justamente lo anterior explica que la acción para demandar estos asuntos no sea la de nulidad -como también lo sugieren de forma equivocada aquellas providencias- sino la de ineficacia, en la cual, se reitera, lo relevante es determinar, sin más agregados, si la persona al momento de suscribir el acto de traslado de régimen pensional ha sido debidamente informada sobre las ventajas, desventajas y consecuencias de su traslado y permanencia en el RAIS.*

Las costas en esta instancia quedan a cargo de **Colpensiones** a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000,00 a favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca parcialmente, adiciona y confirma la sentencia revisada por apelación y consulta**, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito, dentro del proceso promovido por **Juan Diego Uribe Loaiza** en contra de las **AFP Porvenir S.A., Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y Colpensiones**, así:

**Revoca parcialmente el numeral tercero**, en el sentido de ordenar a la **AFP Porvenir S.A** devolver a COLPENSIONES **la totalidad de las cotizaciones obligatorias** recibidas con motivo de la afiliación del demandante al RAIS, con los rendimientos financieros, **incluidos los descuentos efectuados por gastos de administración, seguros previsionales y aporte a garantía de pensión mínima, durante el tiempo de permanencia en esa AFP**, obligación que debe cumplirse dentro de los **30 días siguientes** a la ejecutoria de esta decisión. **Los últimos tres conceptos (gastos de administración, porcentaje aplicado a seguros previsionales y a garantía de pensión mínima) deberán devolverse debidamente actualizados mediante el mecanismo de la indexación**, y con cargo a los recursos de la AFP. **Revoca parcialmente el numeral cuarto, para incluir dentro de las restituciones que debe efectuar Colfondos con cargo a sus propios recursos, los gastos de administración, porcentaje aplicado a seguros previsionales y a garantía de pensión minina**, durante el tiempo de vigencia de la vinculación del demandante a esa sociedad, debidamente indexados.



**Adiciona** ambos numerales para ordenar a las AFP que al momento de efectuar las restituciones alleguen a Colpensiones, relación de los diferentes rubros, discriminando sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique

**Revoca el numeral sexto**, en cuanto declaró oficiosamente probada la excepción de inexistencia de la obligación de devolver los porcentajes aplicados a gastos de administración y primas de seguros previsionales.  
**En lo demás se confirma la providencia revisada.**

Costas en esta instancia a favor del demandante y a cargo de Colpensiones. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL  
Magistrada

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA  
Magistrado